

C.A. de Temuco

Temuco, siete de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Que con fecha 27 de enero de 2023, el abogado don **Darío Fernando Silva Villagrán**, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova N° 3788, oficina 31, comuna de Vitacura, Santiago, comparece en representación *de don ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ*, procesado en causa Rol N° 1675-2003, en favor de quien recurre de amparo “en razón de haberse dictado en su contra Auto de Procesamiento por el delito de homicidio calificado por el Ministro de Fiero, señor Álvaro Mesa Latorre”.

Agrega que “dicha resolución dispuso el arresto domiciliario total de mi defendido con infracción de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y las leyes y es menester que SSI. adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de mi representado.”

A continuación, dice que el auto de procesamiento es ilegal y arbitrario, toda vez que, como expondrá, se habría vulnerado el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a no haber tomado la declaración indagatoria a su representado en relación a los hechos materia del auto de procesamiento y que, además, “se funda en graves errores de hecho y de derecho, por lo que no satisface mínimamente las exigencias del artículo 274 y 275 del Código de Procedimiento Penal”.

Enseguida, refiere la presentación del recurrente lo que denomina antecedentes preliminares, y afirma que “EL AUTO DE PROCESAMIENTO NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA ESTABLECIDO EN EL ART.



274 DEL C. PENAL”, agregando que “en este sentido, la medida cautelar aplicada como el auto de procesamiento que constituye su fundamento, se han dictado al margen de las normas constitucionales y legales que regulan la materia, lo que lo torna ilegal y arbitrario porque no se encuentra justificada la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal para someter a proceso a mi defendido” y que en este caso su representado “jamás fue citado a declarar respecto de la muerte de los señores Julio Riffo Figueroa, René Bravo Aguilera, Pedro Juan Yáñez Palacios, y Raúl Rodrigo Obregón Torres, ni menos aún, de las circunstancias en que estas se produjeron”.

Agrega que “don Rosauro Martínez, ha declarado en más de una oportunidad, sin embargo, siempre lo hizo en otra arista de este proceso por la cual se encuentra procesado desde el año 2014 y que dice relación con un hecho completamente distinto en cuanto a las víctimas, fechas y circunstancias, que ocurrieron en el marco de un enfrentamiento de mi defendido junto a dos soldados con tres guerrilleros llamados Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval.”

Según el recurrente, su defendido “jamás fue interrogado respecto de la muerte de las personas por las que hoy se le somete a proceso, es más, después de ser desaforado por los hechos materia de este auto de procesamiento -mi representado era diputado de la República a esa fecha- jamás ha sido citado a declarar”, y que en este escenario se estarían vulnerando mandatos que sobre la materia contiene nuestro Código de Procedimiento Penal, como también nuestra Carta Fundamental, al no haber sido citado, interrogado o emplazado en el proceso respecto de los hechos que configurarían el delito de homicidio calificado habiéndosele encausado igualmente, omitiendo el trámite esencial de la declaración indagatoria.

A continuación, afirma el recurrente que “EL AUTO DE PROCESAMIENTO SE ERIGE SOBRE GRAVES ERRORES



DE HECHO Y DE DERECHO”, señalando como antecedentes preliminares al efecto que su representado “ya se encontraba procesado, desde el mes de septiembre del año 2014, en una de las tantas aristas de la presente causa y que dice relación con la muerte los señores Calfuquir, Monsalve y Guzmán. Hechos en los cuales mi representado, desde su primera declaración en este proceso, ha reconocido su participación en los mismos términos que lo hizo en la Fiscalía Militar en la investigación de estas muertes el año 1981. Todo ello, sin perjuicio de sostener, al mismo tiempo, la concurrencia de causales de justificación como lo son la legítima defensa de extraños, legítima defensa propia y el cumplimiento del deber, todas las cuales, sin duda hacen desaparecer la existencia del delito. Hago mención a esto – dice el recurrente - porque es importante destacar que mi representado jamás eludió su participación en los hechos, al contrario, asumió su participación cuando la hubo, sin perjuicio de lo que en definitiva se determine en cuanto a su responsabilidad penal.”

Luego dice que “también es importante señalar que este proceso, con todas sus aristas, se inició en el mes de julio del año 2003, es decir, 20 años a la fecha y actualmente existen autos de procesamiento en todas las aristas de la causa, inclusive en la que hoy motiva el presente recurso de amparo” y que “lo anterior es un dato relevante, ya que en las distintas aristas del proceso que hoy nos convoca existen autos de procesamiento dictados hace más de 10 años a la fecha, respecto de las mismas víctimas por las que ahora se somete a proceso a mi representado, y como podrá advertir, sin nueva prueba que justifique 10 años después someter a proceso a mi representado”, refiriendo como “éstas aristas”, los homicidios de René Bravo Aguilera y Julio Cesar Rifo Figueroa, en que se dictó auto de procesamiento el 23 de junio de 2011; homicidio de Raúl Obregón Torres, en que dictó auto de procesamiento el 09 de abril de 2013; y homicidio de Pedro Yáñez Palacios, en la cual se dictó auto de procesamiento el 23 de junio de 2011.



Según el recurrente, “en ninguna de estas aristas del proceso, a diferencia de aquella arista en que mi representado estaba procesado y admitió participación”, “existen antecedentes que ameriten el mínimo estándar de seriedad o convicción que se requiere para esta etapa o antejuicio, y que justifique, en definitiva, formar causa en contra de mi representado, conforme lo previene el art. 274 del Estatuto de Instrucción Criminal” y que: “Asimismo, la solicitud de desafuero que trae como consecuencia este auto de procesamiento, no se originó en la actividad del juez que aprecia los datos reunidos; sino, en una petición de algunos actores del proceso encaminada al mismo fin. En este sentido y para ir dando por terminado este acápite preliminar, ya un primer antecedente que nos llama profundamente la atención y que respetuosamente quiero advertir a SSI., es que las tres aristas que hoy nos convocan cuentan con autos de procesamiento firmes y ejecutoriados, dos de ellas, en junio de 2011 y la tercera, en abril del año 2013. Es decir, hace más de 12 y 10 años atrás, respectivamente. Todos estos autos de procesamiento se encuentran vigentes en contra de distintos imputados, que han reconocido autoría en los hechos, los cuales son miembros de la CNI, agrupación a la que jamás perteneció mi representado.”

Sostiene el recurrente que, en concreto, “los antecedentes que se tuvieron en vista para dictar los autos de procesamiento vigentes en estas causas son exactamente los mismos respecto de los cuales hoy se está dictando el auto de procesamiento de mi representado, con la única diferencia de haberse tomado nuevamente –a los mismos testigos– algunas declaraciones el año 2014, en las cuales todos, sin excepción, ratificaron su declaración anterior sin agregar ningún nuevo antecedente de juicio a los ya existentes”.

Luego de concluir preguntándose que pasó para que doce años después se decida con los mismos antecedentes procesar a su representado, en lo que denomina un nuevo acápite, reclama una falta participación material en los hechos que se le imputan, “sino que su



responsabilidad se sustenta en una autoría mediata derivada del mando ejercido en todas las operaciones que se desplegaron en la zona”, cuestionando lo que sostiene el auto de procesamiento, indicando que como “lo sostuvo en el desafuero, de acuerdo al mérito de los antecedentes, estos homicidios fueron cometidos por los ya procesados e integrantes de la CNI, respecto de los cuales mi representado no tiene participación alguna y menos aún algún tipo de mando, en su rango de capitán del ejército, respecto de los integrantes de esta organización” y que “en este sentido y como señalaremos a continuación, no es posible sostener que mi representado, siendo un capitán de 30 años de edad, que fue enviado a cargo de una Compañía -la N° 8 de Llancahue-, pudiese tener el liderazgo de toda la operación militar desplegada en Neltume, en esa época, con distintas unidades, con oficiales de grado superior al señor Martínez y más aún, con organismos como la CNI que dependían directamente del Ministerio del Interior.”

En otro acápite de su recurso, despliega el recurrente lo que denomina “un breve y necesario análisis de la función que cumplía Rosauro Martínez en Neltume, además del mando que tenía y cuáles eran las fuerzas que participaban en la zona, para luego analizar si se cumplen mínimamente las condiciones de la autoría imputada.”

Señala así que “alrededor del mes de junio de 1981, habiéndose tomado conocimiento de la presencia de guerrilleros en la zona de Neltume, quienes habrían ingresado al país provenientes de Argentina por pasos no habilitados, se le ordenó a mi representado por parte del General del Regimiento de la IV División de Valdivia que envíe dos patrullas de su Compañía a la zona de Neltume, con la finalidad de ejercer acciones de contraguerrilla, consistentes en detectar la ubicación de la guerrilla y establecer un cerco en la zona. Cabe destacar que mi representado tenía 30 años de edad y el rango de capitán, desempeñándose en la IV División de Ejército de Valdivia, en donde se encontraba a cargo de la Compañía de Comando N° 8 de



Llancahue, de la cual era su capitán. A este respecto, es importante señalar que una “Compañía” es la unidad básica del Ejército y que se encuentra al mando de un oficial subalterno, es este caso, un capitán. “

“Ante la orden señalada, en primera instancia, se enviaron dos patrullas con 15 hombres cada una, permaneciendo mi representado en Llancahue, Valdivia. Estas patrullas cumplieron su labor de encontrar el campamento guerrillero y cercar la zona, y cabe destacar que nunca tuvieron un enfrentamiento con guerrilleros de la zona, en circunstancias que esta labor era de otras unidades como la unidad antiterrorista de la CNI. En efecto, consta en el proceso que, con antelación en la zona, se encontraba las unidades antiterroristas de la CNI, provenientes desde Santiago y que tenían por objeto neutralizar a los guerrilleros, a las que posteriormente se unieron, también, Carabineros de Chile y Comando de Aviación de Rancagua.”

“Más tarde, en el mes de septiembre, específicamente el día 13, **según consta a fojas 828 del proceso**, mediante **Orden Secreta de la IV División de Ejercito Cuartel General**, firmado por el Brigadier General Rolando Figueroa N° 3560, se dispone el empleo de medios militares perteneciente a la Compañía de Comandos 8 en la zona de Neltume, de la cual el capitán Rosauro Martínez era Comandante, con el objeto de ejecutar acciones de contraguerrilla a contar del día siguiente, es decir, el 14 de septiembre. Razón por la cual mi representado junto a su compañía salen a la madrugada del día siguiente.”

A continuación, expone el recurrente puntos que a su juicio habría que tener presente y luego expone su propio y detallado análisis de los antecedentes que vinculan a su representado con los homicidios de René Eduardo Bravo Aguilera y Julio César Riffo Figueroa, de Pedro Yáñez Palacios y de Raúl Obregón Torres, en todos los cuales se habría dictado antes auto de procesamiento en contra de otras personas, en las fechas que indica, reiterando, basado en los antecedentes que expone y según los cuales – en su concepto- se



determinaría que los homicidios no fueron cometidos por su representado, para finalmente señalar que las imputaciones en contra de este no tienen ningún fundamento serio que ameriten su procesamiento, por lo que pide sea dejado sin efecto y se declare que Rosauro Martínez Labbé no es procesado por los delitos imputados en aquella resolución.

Que a folio 10, **informa don Álvaro Mesa Latorre**, Ministro en Visita Extraordinaria, quien – en síntesis – en primer término señala que no procede el amparo cuando se han deducido otros recursos legales en contra de la resolución que se ataca de amparo, indicando que el abogado Darío Silva Villagrán interpuso apelación el 13 de enero de 2023 en contra del auto de procesamiento y de la medida cautelar, y que dicha apelación, respecto al auto de procesamiento, fue desistida con fecha 23 de enero de 2023 por resolución emitida por esta Corte, y que no podría revocarse un auto de procesamiento respecto del cual se presentó apelación y luego la parte se desistió sin nuevos antecedentes, agregando que una vez desistido de la apelación, procede prontuariat al encartado y sólo es posible modificar el auto de procesamiento con nuevos antecedentes, lo que en este momento la defensa no ha presentado.

En cuanto a la afirmación del recurrente que no se le habría tomado declaración por estos hechos al procesado y ex Diputado Rosauro Martínez Labbé, precisa que la causa constituye un todo y en la cual han participado diferentes magistrados y tribunales, que no existe ninguna indefensión por parte del acusado, y que en la causa constan las declaraciones tomadas a Rosauro Martínez Labbé el 3 de noviembre de 1981, en el expediente militar 551-81 actual foja 793 y siguientes de causa rol 1675-2003, y que en ella se le pregunta respecto de la muerte de otros extremistas y responde “no tengo conocimiento ya que mi participación se limitó a la acción relatada”, de la misma forma, a fs. 1.188, en el Oficio dirigido a la Ministra de la época doña Emma Díaz Yévenes, en el punto N° 3 señala que “ni en



la misión que alude ni en ninguna otro estuve en contacto, conocido o conté con la presencia del citado señor Riffo”, luego, a fojas 1.849 de fecha 09 de noviembre de 2010 respondiendo a la misma Ministra se refiere a su labor en el operativo como Capitán de la Compañía de Comandos de la IV División de Ejército en la zona de Neltume, y que teniendo la posibilidad de explicar algún detalle sobre lo ocurrido, nada expresa y que posteriormente, a fs. 2.903, el 30 de julio de 2014, se le interroga nuevamente sobre el operativo realizado por la Compañía de Comandos N° 8 en la zona de Neltume e interrogado si recibió alguna distinción por su participación, responde que sí fue destacado por esta acción.

Agrega el informante que del estudio de los antecedentes “tanto de la resolución de 5 de enero de 2017 que dio lugar a la formación de causa en contra del Diputado Rosauro Martínez Labbé respecto de las muertes Rene Bravo Aguilera, Julio Cesar Riffo, Raúl Obregón Torres y Pedro Yáñez Palacios, en aquel debate la defensa en momento alguno alegó sobre la falta de declaración del acusado Rosauro Martínez Labbé” y que más aun, la propia resolución de desafuero alude en el punto 6 a la declaración de Rosauro Martínez Labbé en la causa militar. Del mismo modo, revisando el tomo XV de esta causa en la apelación interpuesta por el abogado Darío Silva Villagrán no hay ningún alegato de alguna indefensión respecto a que no se le haya consultado o tomado declaración sobre otros hechos ocurridos en el operativo efectuado en Neltume y que en la propia acción de amparo, como argumento para desvirtuar el auto de procesamiento, el requirente en 2 oportunidades indicó “sin embargo, respecto a las otras aristas, su defendido señaló: respecto de la muerte de otros extremistas no tengo conocimiento ya que mi participación se limitó a la acción relatada”.

Señala el informante que, si como estrategia del acusado este decide guardar silencio, no puede imputársele al tribunal



dicha situación y que, en consecuencia, no resulta atendible esta alegación toda vez que, desde 3 de noviembre de 1981, según se ha dicho, el acusado ya tenía conocimiento de los hechos y se le preguntó sobre la materia, por lo que no existe ninguna indefensión en este punto para el acusado y en su criterio esto debe ser rechazado.

Hace presente que este proceso consta de 15 tomos y a lo menos 230 testigos, por lo que el traspaso de una causa de un ministro a otro no conlleva automáticamente que se traspase la apreciación probatoria y el convencimiento, a diferencia de lo que expone la defensa de manera errónea, por lo que hay que volver a estudiar prueba por prueba, ampliar declaración, relacionar y ponderar toda la prueba, que es lo que él ha hecho con la dictación del auto de procesamiento de 23 de diciembre de 2022.

Luego indica que este debate se ha realizado ya 2 veces y este amparo sería la tercera, que los mismos argumentos con los mismos medios probatorios, ya lo realizó el mismo abogado en la resolución que dio lugar a la formación de causa en contra del ex diputado Rosauro Martínez Labbé y que el segundo momento está constituido por la apelación en contra del auto de procesamiento interpuesta el 13 de enero de 2023, la que tiene los mismos fundamentos y cita de testigos y otras pruebas por parte de dicho abogado, apelación que fue desistida, según resolución de 23 de enero de 2023, y que este segundo momento se complementa con el recurso de apelación respecto de la medida cautelar que fue por esta Ilma. Corte el 17 de enero de 2023 donde se expresó “atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los abogados representantes de las partes en audiencia, compartiendo los argumentos señalados por el Ministro instructor [...] se confirma la medida cautelar de arresto domiciliario total”.

A continuación, el informante plantea que, si los argumentos del recurrente tuvieran alguna ventana de ser atendibles, por qué entonces el 5 de enero de 2017, con menos antecedentes y



elementos de prueba la Ilma. Corte de Valdivia dio lugar a la formación de causa en contra del acusado citado y señala que el mismo razonamiento puede hacerse respecto de la medida cautelar de arresto domiciliario total confirmada.

Que desde otra perspectiva – prosigue el informe –, desde un punto de vista argumentativo y procesal, centrados en la racionalidad de la apreciación probatoria, no resulta atendible que la defensa no haya podido impedir el desafuero de su representado, presente una apelación en contra del auto de procesamiento y luego que se dicta, la Corte confirme la medida cautelar de arresto domiciliario total y con posterioridad a eso, no obstante que el justiciable ya ha sido amparado por el derecho, interponga una acción de amparo. No resulta racional que con mayores antecedentes y relación e integración de prueba que la que existía al 5 de enero de 2017, cuando la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia analizó el desafuero, pueda pretender la defensa, en sede de amparo y no de fondo de la instancia, discutir, como se ha indicado 15 tomos, más de 200 testigos.

El informe cita luego algunos considerandos de la resolución de fs. 5.020 de 5 de enero de 2017 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, que dio lugar a la formación de causa en contra del Diputado de la época Rosauro Martínez Labbé:

Duodécimo, numeral 5, en declaración de Conrado Vicente García Giaier de fs. 1.754, en que trasladándose a Valdivia se entrevistó con el Comandante de la IV División General Figueroa, luego se traslada a Liquiñe y expresa “en el lugar se organizaron y procesaron información que le llegaba de lugareños y de la Compañía de Comandos”.

Considerando duodécimo, numeral 7, declaración por oficio de Rosauro Martínez Labbé de fs. 1.849, que recibió la orden de constituirse con su Compañía en la zona general de Neltume, con el objeto de establecer la posible presencia de grupos de guerrilla y en el



cumplimiento de la misión se llevó a efectos por medio de la Compañía de Comandos, sin apoyo directo de la Unidad Antiterrorista ni de otra Unidad”.

Numeral 8, copia de la hoja de vida del Capitán Rosauro Martinez Labbé donde consta una anotación de agosto de 1981 “se hace acreedor de una anotación de mérito por su extraordinario desempeño al mando de la Compañía 8, durante las acciones de combate realizadas por la unidad en actividades de contra subversión en la zona general de Neltume. Los éxitos obtenidos por la unidad reflejan claramente las extraordinarias dotes de conductor militar y los conocimiento sólidos de ejecutante y jefe de su especialidad”. Lo que refleja que con anterioridad a Septiembre de 1981 el acusado estaba a cargo de la operación general en Neltume y los oficios posteriores van a ratificar aquello.

Numeral 9, informe de la Central de Informaciones (CNI) de fs. 624 y siguientes que da cuenta entre otros a las muertes de Raul Obregón, Pedro Yáñez Palacios, Rene Bravo y Julio Riffó Figueroa y expresa “doy cuenta a Us. que en enfrentamiento en el sector de Neltume entre patrullas de Carabineros, militares y fuerzas de seguridad, cayeron abatidos los delincuentes pertenecientes al M.I.R. cuyos antecedentes son los siguientes...”

Numeral 12: informe policial de la Brigada Investigadora de delitos contra los Derechos Humanos, de fs.3.507, que en su parte conclusiva señala “que todos los entrevistado en el presente informe policial concuerdan en que quien estuvo a cargo de todas las operaciones de Neltume fue en el entonces Capitán Rosauro Martínez Labbé”.

Considerando décimo cuarto, inciso tercero “constan numerosos testimonios contestes de soldados conscriptos quienes señalan que el capitán Martinez coordinaba y estaba a cargo de todos los operativos del lugar y dan cuenta además del contacto que este



tuvo con efectivos de las Unidades Antiterroristas de la Central Nacional de Informaciones C.N.I.

Considerando décimo séptimo la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, también se hace cargo que el acusado ya realizaba actividades en la zona general de Neltume y cita la declaración del también procesado Luis Jerez Prussing , de fs. 794 “el 10 de septiembre último me dirigí a la zona de Neltume integrando un personal de fuerzas especiales que había recibido la orden superior de integrarnos a las fuerzas militares que operaban en dicha zona y que participaban en el rastreo de un grupo de extremistas. Luego, judicialmente a fs. 1.756 declara: “cuando llegué a Liquiñe ya estaba instalada la compañía de comandos de Valdivia” y agrega “en el lugar permaneció desde la última quincena de agosto hasta antes del 18 de septiembre”. Lo mismo puede decirse, en el mismo considerando, Luis Arturo Sanhueza Ross, Oficial a la época de la Compañía de Comandos N° 8, quien señala que desde el momento que fue descubierto el campamento base de los guerrilleros (26 de junio de 1981), des este hecho el Teniente dio cuenta al Capitán Martínez vía radio de telecomunicaciones y puntualiza que “a los pocos días comienzan a llegar muchos refuerzos de la Compañía de Comandos y de diferentes unidades”.

Luego agrega el informe que sobre la calidad de jefe militar de la operación en la zona de Neltume también están los dichos de los soldados conscriptos de la Compañía N° 8 de Comandos, Williams Álvarez Espinosa, de fs. 6.842; Ángel Limarí Provoste, de fs. 6.852; entre otros testimonios, y que un asunto que se debe remarcar es que todos los testigos que cita el requirente en su presentación, están individualizados de forma correlativa por fojas en el auto de procesamiento y en relación al testigo Guido Kuschel Weber este en modo alguno permite rebatir los argumento del auto de procesamiento, es decir, no existe indefensión alguna para la defensa respecto de la ponderación de medios probatorios.



Señala también que la resolución de desafuero en el considerando décimo cuarto se hace cargo sobre la verticalidad del mando y cita el episodio Caravana de la Muerte “es conocida la gran importancia que tiene en una institución armada de la República la verticalidad del mando y la obligación del inferior de cumplir estrictamente las órdenes del superior, lo que de no hacer puede significarle medidas disciplinarias, juicios militares, la destitución u otras más graves cuando ocurren en tiempo de guerra.”

Agrega que un punto esencial y que también se señala en el auto de procesamiento y en la resolución de desafuero tantas veces citada, es la anotación de 16 de noviembre de 1981 en que el comandante en Jefe de la IV División dispuso felicitar al capitán Rosauro Martínez Labbé como Comandante de la Compañía de Comanda N° 8 de Valdivia como destacada participación al mando de su unidad en la zona de Neltume.

Según el informe, si tuvieran algún grado de aceptabilidad los argumentos que desde enero de 2017 viene argumentando la defensa, todo aquello, “además de lo antes razonado por este Ministro”, *se derriba porque dicha anotación antes aludida, expresa* “destacada participación al mando de su unidad en la zona de Neltume como fuerza de choque y seguridad en procura de la neutralización de la célula guerrillera que ese había enquistado en ese lugar, logrando su desbaratamiento por medio de choques armados en los cuales resultaron 7 extremistas muertos, sin bajas por parte del ejército. Esto permite corroborar una vez más la excelente preparación física y combativa del personal CMOP CDOS.8, demostrando el excelente profesionalismo y capacidad de líder y conductor de hombres de su comandante”.

Finalmente, en relación con la afirmación de la recurrente de *que demostrará que su acusado no es responsable de los hechos que se le imputan*, hace presente que desde que el año 2017,



fecha en que quien informa conoce de la causa, la defensa no ha solicitado diligencias y sólo lo han hecho los querellantes.

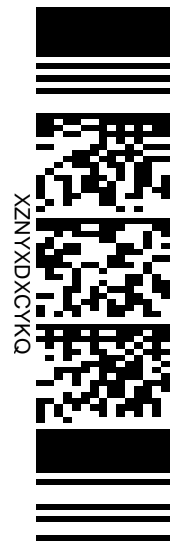
Se ordenó traer a la vista rol penal 1675-2003.

Se realizó la vista de la causa en audiencia de 6 de febrero de 2023, y alegaron por el recurso la abogada doña Manuela Miquel Barros en representación de don Rosauro Martínez Labbé, y contra el recurso abogado don Sebastián Saavedra Cea, abogada doña Magdalena Garcés Fuentes, y doña Catalina Paz Ross Fredes, abogada de la Unidad Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en representación de querellantes, quedando los antecedentes en acuerdo.

**CON LO RELACIONADO y
CONSIDERANDO:**

1º Que de la lata exposición realizada previamente, en relación con los antecedentes existentes, queda claro que mediante el amparo que, con fecha 27 de enero de 2023, intenta el abogado don **Darío Fernando Silva Villagrán** en representación de don **Rosauro Martínez Labbé**, se ataca el auto de procesamiento dictado por el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Meza Latorre, en contra de Martínez Labbé con fecha 23 de diciembre de 2022, en causa penal 1675 – 2003, resolución que – según indica el recurrente – “dispuso el arresto domiciliario total de mi defendido con infracción de lo dispuesto en la Constitución Política de la República y las leyes”, agregando que “el auto de procesamiento es ilegal y arbitrario”, ya que se habría vulnerado el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a no haber tomado la declaración indagatoria a su representado en relación a los hechos materia del auto de procesamiento y que, además, “se funda en graves errores de hecho y de derecho, “por lo que no satisface mínimamente las exigencias del artículo 274 y 275 del Código de Procedimiento Penal”.

2º Que, como se ha visto, en el presente caso la acción intentada ataca una resolución dictada en el marco del



procedimiento regido por el Código de Procedimiento Penal, cuerpo legal que en el Título V de su Libro Segundo regula el procedimiento de amparo, disponiendo en el artículo 306 que todo individuo que se encuentre en alguna de las situaciones que la misma norma indica, podrá, **“si no hubiere deducido los otros recursos legales”**, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los defectos denunciados.

3º Que, según consta, de los antecedentes que se tienen a la vista de la causa penal Rol N° 1675-2003, Tomo XV:

Mediante presentación de fecha 13 de enero de 2023, en lo principal el abogado Darío Silva Villagrán por su representado don Rosauro Martínez Labbé, sustentado en la misma argumentación que señala en el amparo, ha pedido “tener por interpuesto recurso de apelación en contra del auto de procesamiento librado en contra de don ROSAURO MARTÍNEZ LABBE, con fecha 23 de diciembre del 2022”.... “en el cual se le indica como supuesto autor del delito de homicidio calificado en las personas de Julio Riffó Figueroa, René Bravo Aguilera, Pedro Juan Yáñez Palacios y Raúl Rodrigo Obregón Torres”. Se ha pedido que se conceda el recurso y que se eleven los antecedentes “ante la Iltna. Corte de Apelaciones, a fin de que el Tribunal de Alzada, conociendo del recurso, de los antecedentes que obran en el proceso y de las alegaciones en estrado de esta parte, revoque la resolución apelada y declare que don ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ, no es procesado en esta causa”. En el otrosí de la misma presentación interpone recurso de apelación en contra de resolución que denegó libertad provisional de su representado, que se encuentra con la medida de arresto domiciliario total.

Por resolución de fecha 13 de enero de 2023, se tienen por interpuestos y se conceden por el tribunal a quo en el solo efecto devolutivo los recursos de apelación en contra de la resolución que sometió a proceso y en contra de la que negó la libertad provisional a Rosauro Martínez Labbé.



Con fecha 17 de enero de 2023 esta Corte de Apelaciones de Temuco resuelve que se confirma resolución que, en lo pertinente, impuso medida cautelar de arresto domiciliario total respecto del procesado Rosauro Martínez Labbé y que no hizo lugar a su solicitud de libertad provisional bajo fianza, ordenando, además, que se retengan los autos a fin de conocer de la apelación referente al auto de procesamiento.

Por resolución de 23 de enero de 2023, copia de la cual está agregada a fs. 7567 de la causa que se tiene a la vista, esta Corte de Apelaciones de Temuco ha resuelto, en lo pertinente:

“*VISTO:*

Téngase por DESISTIDO al procesado don Rosauro Martínez Labbé, representado por su abogado don Darío Fernando Silva Villagrán, de su recurso de apelación deducido en contra del auto de procesamiento de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós, escrito a fojas 12 del cuaderno de compulsas”.

4° Que, según resulta comprobado, con anterioridad al reclamo en contra de la resolución de fecha 23 de diciembre de 2022 que somete a proceso a Rosauro Martínez Labbé, canalizado a través de la presente acción de amparo, el mismo recurrente, no solo ya había deducido un recurso de apelación en contra de la misma, sino que a su respecto se dictó por esta Corte una resolución de término, ya que a instancia de la propia parte, se lo tuvo por desistido del recurso deducido, configurando así plenamente el presupuesto que nuestra legislación ha previsto en el citado artículo 306, para la improcedencia de la acción allí prevista, en relación con el artículo 21 de nuestra Constitución Política, lo que es suficiente motivo para decidir el rechazo de la acción deducida.

5° Que, sin perjuicio de lo anterior, y de lo que hipotéticamente pudiere estimarse en otro momento procesal y en sede de ejercicio de potestad propiamente jurisdiccional, y no facultades conservadoras como las que en especie corresponden a esta acción de



urgencia, en el escenario de la misma se observa que el informe evacuado respecto de la resolución recurrida, suficientemente explica los aspectos que el recurrente cuestiona, particularmente en lo que se refiere a la supuesta ausencia de declaración indagatoria y otros aspectos de la resolución que lo somete a proceso.

Además de varias otras declaraciones, anteriores a su procesamiento, que el informe evacuado menciona, referidas también por los querellantes en sus alegatos, en la causa traída a la vista consta declaración prestada por Rosauro Martínez Labbé con fecha 30 de julio de 2014, en la que, aparte de lo resaltado por don Alvaro Meza Latorre en su informe, si bien no se refiere el declarante específicamente a los homicidios de las personas que menciona el recurrente, exhortado a decir verdad, en lo pertinente y en síntesis, reconoce que era Comandante del Comando N° 8 de Valdivia, y que en esa calidad fue precisamente él quien designó a dos patrullas para que hicieran reconocimiento en el lugar donde lugareños de Neltume, en el mes de mayo de 1981, habían observado la presencia de personas extrañas. También señala que efectivamente la Compañía que él dirigía tenía un entrenamiento especial y, según su relato, en el mes de junio del mismo año 1981, una de las patrullas que él designó para que subieran a Neltume detectó a un grupo de individuos que se trataba de un grupo subversivo, se refiere a la razón de su permanencia en dicho lugar, como asimismo a la llegada de diversas unidades desde la capital, de la Escuela de Paracaidista y de la CNI, quienes se instalan en el sector de Neltume.

6° Es importante hacer presente que el auto de procesamiento dictado con fecha 23 de diciembre de 2022, que consta de fs. 7286 a fs. 7318 de la causa traída a la vista, según la misma resolución parte indicando, está estructurado de la siguiente manera:

I.- Introducción sobre los estándares normativos e interpretativos y el control de convencionalidad, en relación a la violación grave de los derechos humanos (en este caso comisión de



delitos de lesa humanidad), pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre la obligación de investigar. (Considerandos 1-9);

II.- *Síntesis de estos estándares normativos e interpretativos (considerando 10);*

III.- *Aplicación del control de convencionalidad en esta materia (considerandos 11 al 13);*

IV.- *Jurisprudencia internacional sobre la materia (Considerandos 14-28)*

V.- *Síntesis de argumentación y razonamiento judicial (Considerandos 29 al 31);*

VI.- *Elementos de prueba, descripción de los hechos, conductas, determinación por ahora del tipo penal y los presuntos responsables del hecho investigado, aplicación de medidas cautelares y otras medidas administrativas (Considerandos 32 a 33).*

7º Que, asimismo, según se observa, conforme a la detallada indicación de antecedentes que se realiza en el motivo 32 de la resolución atacada, se estima que queda suficientemente acreditado, entre otros, el hecho de que el 26 de junio de 1981, se inicia oficialmente el **operativo Militar liderado por** el Capitán **Rosauro Martínez Labbé, que tiene como objeto el aniquilamiento de** los integrantes del grupo de **jóvenes** guerrilleros **pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionario** (MIR), participando de este operativo las siguientes unidades militares y de carabineros: Regimiento de Aviación Rancagua; Tropas Especiales Compañía de Comandos N° 8; Prefectura de Carabineros de Valdivia, y todas sus unidades dependientes. *(según consta en Oficio IV División de Ejército N° 3560/112/1184, envía orden secreta de fs. 828 y fs. 829, tomo II).* Igualmente se tiene por establecido que durante la segunda quincena de agosto de 1981, y **con el objeto de reforzar el batallón liderado por** Rosauro Martínez Labbé, llega a la zona de conflicto la Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de



Informaciones (CNI), conformada por 15 uniformados aproximadamente, y a cargo del Capitán Conrado Vicente García Giaier. A esta fecha, al batallón comandado por Rosauro Martínez Labbé, ya se encontraban anexadas las unidades de Santiago y Valdivia de la Central Nacional de Informaciones, así como su "Grupo Rojo", el que estuvo a cargo del Capitán del Ejército de Chile Enrique Erasmo Sandoval Arancibia.

Refiere además, el procesamiento en este mismo motivo seis episodios que concluyen con la muerte de las personas que en cada caso se indica, siendo pertinentes aquí los primeros cuatro episodios, en los que se atribuye participación en calidad de autor a Rosauro Martínez Labbé, en su calidad de Capitán, *quien a la época de los hechos, ostentaba el cargo de Comandante de la Compañía de comandos N° 8, del Batallón "Llancahue", dependiente de la IV División de Ejército, Compañía que estuvo dirigiendo la operación en Neltume durante todo el periodo que esta duró. El mencionado Capitán Martínez, fue el encargado de organizar los distintos grupos que se movilizaron por el sector, proporcionando armamento y entregando instrucciones, entre las que se destacaba que "Estaban en guerra" y que "al ver algún hombre con las característica de guerrilleros, se debía disparar a matar" (según declaraciones de fojas 3153 , fs. 3155, fs. 3180, fs. 3182, fs. 3219, fs. 3185, fs. 3350, fs. 3355, fs. 3368, fs. 3385, fs. 3400, fs. 3478 (tomo VI) , fs. 3616 (tomo VII) entre muchas otras; documentos de fojas 1085 (tomo III) y siguientes, 1286 (tomo IV) y siguientes, 2338 (tomo V) y siguientes).*

Así, en el motivo 34, se concluye que "de estos mismos antecedentes y propias declaraciones de **ROSAURO MARTÍNEZ LABBÉ** de fs. 1.188 a fs. 1.189 (Tomo III), de fs. 1.849 (Tomo IV), de fs. 2.903 a fs. 2.905 (Tomo VI), de fs. 4.883 a fs. 4.886 (Tomo IX), se desprenden fundadas presunciones para estimar que le ha cabido la calidad de **AUTOR** en virtud del artículo 15 N°1 del Código Penal, en el delito de **homicidio calificado**, en su



carácter de lesa humanidad, referido en la consideración 33, en las personas de Julio Riffo Figueroa, René Bravo Aguilera, Pedro Juan Yáñez Palacios, Raúl Rodrigo Obregón Torres”.

8° Importante resulta destacar en este punto, sin perjuicio de lo que además considera la resolución atacada en los motivos siguientes como síntesis de la argumentación, y que ha razonado en los anteriores, que en el motivo 28 en su letra e), reflexiona señalando que “como indica el mérito del proceso, las actuaciones en contra de *Rodrigo Obregón Torres, Pedro Juan Yáñez Palacios, Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto, José Eugenio Monsalve Sandoval, René Eduardo Bravo Aguilera, Juan Ángel Ojeda Aguayo, Julio César Riffo Figueroa y Miguel Cabrera Fernández* fueron al margen de todo derecho (por ahora, como indica el mérito del proceso), **en la localidad de Neltume**, nos permite reflexionar, **por ahora en esta etapa procesal**, tomando los casos analizados, y en la perspectiva chilena, que esas unidades del Ejército de Chile fueron un centro ilegal de detención, tortura y ejecución respecto de los opositores del régimen militar, o por capricho de poder militar en relación a otras personas detenidas, tenía- **en esta etapa procesal-** como se ha acreditado- **por objeto reprimir, torturar y ejecutar** a personas, **luego todos los que allí colaboraron a lo anterior y en especial las personas de mayor mando** se encuentran- por ahora, en esta etapa procesal- en condiciones de poder realizarles este primer reproche penal en este auto de procesamiento.”

9° La resolución respecto de la cual se ha recurrido, conforme a la estructura que se detalla en el considerando 6° precedente, con argumentos que esta Corte no puede sino compartir, lata y detalladamente razona, entre otros aspectos, igualmente relevantes, respecto a la obligación del Estado en la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad, observando así que se



encuentra dotada de una adecuada razonabilidad, justificación y fundamento, por lo que, además, de resultar improcedente conforme se ha considerado en particular en el motivo 4º, la resolución judicial que se ataca aparece expedida por autoridad facultada para disponer como lo ha hecho y dentro de los casos previstos por la ley, toda vez que, tal como ella lo sustenta, efectivamente se encuentra justificada la existencia de los delitos investigados y, en la forma en que razonadamente se llega a tal conclusión, en esta etapa procesal, de acuerdo a lo expuesto, también aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado a quien se procesa ha tenido en los delitos pertinentes la participación que se le atribuye, por lo que tampoco ha sido dictada con infracción a las formalidades determinadas en el Código de Procedimiento Penal, en particular a los requerimientos que plantean los artículos 274 y 275 del mismo.

10º Que, en tal contexto, no concurren en la especie los presupuestos que la ley Fundamental de la República ni la especial que - en este caso- su procedimiento reglamenta, han previsto para que el amparo que se intenta sea procedente y pueda ser acogido, por lo que no cabe sino decidir el rechazo de la acción que se dedujo, tal como en lo resolutivo se dispone.

Por estas consideraciones, teniendo presente lo dispuesto en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y artículo 21 de la Constitución Política, se resuelve que **se rechaza el recurso de amparo interpuesto por el abogado don Darío Fernando Silva Villagrán, en representación de Rosauro Martínez Labbé, en contra de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, escrita a fs. 7286 a 7318, TOMO XV de la causa Rol N° 1675-2003, a cargo del Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Claudio Meza Latorre, que somete a proceso a Martínez Labbé como autor del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las**



personas de Julio Riffo Figueroa, René Bravo Aguilera, Pedro Juan Yáñez Palacios y Raúl Rodrigo Obregón Torres.

Agréguese a la carpeta digital, regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro suplente don Luis Olivares Apablaza.

Devuélvase el expediente al Sr. Ministro en Visita de forma Extraordinaria.

Rol N° 14-2023. Amparo.(ela)



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Presidente Jose H. Marinello F., Ministro Carlos Ivan Gutierrez Z. y Ministro Suplente Luis Alberto Olivares A. Temuco, siete de febrero de dos mil veintitrés.

En Temuco, a siete de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

